La FIDH se compromete con un enfoque decolonial para la defensa de los derechos humanos

Reconocer y afrontar el legado de las estructuras coloniales pasadas y presentes para la plena realización de nuestra humanidad común

Introducción

La **Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)** reconoce que, desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) el 10 de diciembre de 1948, se han logrado avances significativos en la promoción de la universalidad de los derechos humanos a escala mundial. Sin embargo, el orden mundial de los derechos humanos continúa ensombrecido por el legado colonial y formas persistentes de colonialismo,[1] como el colonialismo que afecta a los pueblos de Palestina, de tipo racista, religioso, imperialista y de asentamiento a diferentes niveles.

La realidad actual de los efectos persistentes del colonialismo obliga a la FIDH a afirmar su compromiso con un enfoque decolonial de su trabajo, que garantizará que se aborden las estructuras y prácticas coloniales históricamente injustas, así como la colonialidad que persiste e impide la realización y el disfrute de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.

La resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, adoptada el 14 de diciembre de 1960,[2] es un texto fundacional del derecho internacional en materia de descolonización, que reforzó el derecho inalienable a la libre autodeterminación de todos los pueblos bajo dominación colonial y declaró que el colonialismo, en todas sus formas, es incompatible con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Siguiendo su ejemplo, nosotros, nosotras, **la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH),** en nuestro 42.º Congreso, reafirmamos nuestro compromiso de garantizar que la universalidad abarque verdaderamente la pluriversalidad[3] de las diversas experiencias humanas, guiado por los principios de indivisibilidad, interdependencia y realización de los derechos humanos. Sin embargo, reconocemos que estos derechos no pueden garantizarse y realizarse plenamente mientras no se desmantele el actual paradigma de desigualdad e injusticia mundial, arraigado en el legado del colonialismo y la colonialidad más insidiosos.

Hoy en día, a pesar de los avances logrados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario, el legado colonial y neocolonial continúa siendo un obstáculo para la efectividad de los derechos humanos. Las estructuras de dominación, las desigualdades y las injusticias económicas y sociales, las políticas de anexión y la lógica del poder persisten en formas a menudo invisibles, renovadas o incluso toleradas a escala mundial.

Desde esta perspectiva, es fundamental asumir un enfoque decolonial para permitir la plena realización y efectividad de los derechos humanos. Al abordar las raíces históricas y estructurales de las desigualdades, al deconstruir las

1 El colonialismo puede definirse como "una práctica de dominación destinada a extender y mantener el control sobre territorios y sus poblaciones por parte de otro pueblo, reivindicando su superioridad y dominación". Aunque "tanto el colonialismo como el imperialismo fueron formas de conquista que pretendían beneficiar a Europa en términos económicos y estratégicos", es importante diferenciarlos. Para más información sobre estas definiciones, haga clic aquí: https://plato.stanford.edu/entries/colonialism/

2 Lea la resolución 1514 de la Asamblea General aquí:https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-granting-independence-colonial-countries-and-peoples

3 "El concepto de pluriversalidad ha suscitado un interés considerable en los últimos años, especialmente en el contexto de los países del Sur global. Básicamente, la pluriversalidad se refiere a la coexistencia de múltiples mundos, epistemologías y ontologías, y cuestiona la visión occidental dominante de una verdad única y universal." Para más información, haga clic aquí: https://ieim.uqam.ca/le-concept-zapatiste-de-plurivers-et-la-solidarite-internationale/

dinámicas y los mecanismos de dominación, comprendemos mejor los factores que obstaculizan el acceso efectivo de las personas y los pueblos a sus derechos. Este enfoque contribuye a reforzar la universalidad de los derechos humanos al reconocer las realidades vividas y el multiculturalismo de los pueblos colonizados.

Consciente de las realidades expuestas anteriormente, la FIDH decidió, en junio de 2023, llevar a cabo un proceso de reflexión interna sobre los efectos del legado colonial pasado y presente en las realidades y experiencias vividas por las personas a las que afectan los imperios y los patrones históricos que siguen manifestándose en relación con la colonialidad. Este proceso se basó en diversas conversaciones estructuradas en forma de gira mundial por diferentes regiones del mundo afectadas por este ejercicio. En la primera conversación se presentó la colonización desde el punto de vista del colonizador francés, tanto desde el punto de vista histórico como contemporáneo, analizando las consecuencias y los efectos de la colonización y el neocolonialismo francés en particular, y de los imperios europeos en general. A continuación, la gira prosiguió en África, donde se debatió el alcance de la colonización (del conocimiento, las mentes, los cuerpos, las tierras, la cultura, etc.), sus efectos hasta la actualidad en términos de colonialidad, y los movimientos de resistencia que aún intentan deconstruir y reconectar las culturas y los sistemas de pensamiento africanos. Se debatieron ampliamente las diferentes formas y retos del panafricanismo y la filosofía Ubuntu.[4] En América, nuestro debate exploró la interseccionalidad de las luchas por la descolonización y la resistencia a diferentes formas de opresión. Se pusieron de relieve los vínculos entre las luchas decoloniales, feministas e indígenas por la identidad, lo que demostró la importancia del enfoque interseccional en el debate decolonial. En Asia, la conversación se centró en dos casos concretos que ilustran dos realidades distintas. Por un lado, la colonización de la India, sus realidades y consecuencias para la población india. Por otro lado, la situación en Cachemira, una región ocupada desde 1947 por la India, Pakistán y China, que reclaman la soberanía sobre este territorio. Hasta la fecha, Cachemira sufre no solo las consecuencias de un proceso de descolonización fallido, sino sobre todo la colonización por parte de estas tres potencias regionales. Durante la conversación sobre la región del Magreb y Oriente Próximo, se celebró un debate transversal sobre la experiencia de las diferentes colonizaciones en el Magreb, así como sobre la persistencia, e incluso el refuerzo, de determinadas prácticas de la época colonial en los Estados poscoloniales.

Por lo tanto, la presente resolución se basa en las conclusiones y enseñanzas adquiridas durante la gira mundial. Define asimismo los próximos pasos en términos de seguimiento para garantizar la aplicación concreta de esta resolución por parte de la FIDH.

Principales conclusiones

1. La persistencia de la colonización y las ocupaciones prolongadas

La colonización no es cosa del pasado, sino que persiste en forma de ocupación prolongada, negación del derecho a la autodeterminación y saqueo de los recursos naturales y de los derechos políticos, culturales y económicos.

- **Palestina.** Los órganos de las Naciones Unidas y las ONG han denunciado en innumerables ocasiones el régimen colonialista de apartheid de Israel, la opresión sistemática y el actual genocidio en Gaza. Desde la Nakba de 1948, el pueblo palestino sigue estando sometido a todas las formas de opresión y privación de sus derechos fundamentales, en particular el derecho a la autodeterminación y el derecho de las personas refugiadas palestinas a regresar a sus hogares y tierras. El apoyo diplomático, financiero y militar que prestan principalmente algunos

4 Para más información sobre la filosofía Ubuntu, haga clic aquí: https://tutufoundationuk.org/about-us/ (en inglés)

estados occidentales[5] al Estado de Israel, la potencia ocupante, así como la impunidad de la que sigue gozando frente al actual genocidio, ilustra el doble rasero que socava la legitimidad y la eficacia del derecho internacional.[6]

- **Cachemira.** A esta región, que reivindican y administran la India, Pakistán y China, se le deniega el derecho a la autodeterminación desde 1947. Actualmente bajo administración india, la región está sometida a una ocupación militarizada que se caracteriza por severas restricciones de las libertades, vigilancia masiva, suspensión prolongada de las libertades digitales y represión violenta de toda disidencia. Desde la derogación del artículo 370 de la Constitución india en 2019, se aplican políticas de asentamiento que corren el riesgo de alterar de forma irreversible su composición demográfica y la identidad de esta parte de Cachemira. Bajo la administración pakistaní, los habitantes se enfrentan a restricciones permanentes en materia de participación política, libertad de expresión y autonomía local, que limitan el ejercicio de sus derechos fundamentales.

- **Sáhara Occidental.** La colonización marroquí, que las Naciones Unidas han denunciado en numerosas resoluciones, persiste a pesar de los compromisos adquiridos en el marco del alto el fuego de 1991. El pueblo saharaui sigue privado de su derecho a la autodeterminación, mientras se acosa y encarcela con regularidad a las personas defensoras de los derechos humanos.

- **Tíbet.** Se intensifica la represión cultural, religiosa y política ejercida por el Gobierno chino. La prohibición del idioma tibetano en las escuelas, la vigilancia de los lugares de culto y el encarcelamiento de personalidades intelectuales tibetanas son prácticas que parecen formar parte de un intento de asimilación forzosa.

- **Los territorios de ultramar vinculados a Francia, los Países Bajos y Dinamarca (PTU),[7] así como las regiones ultraperiféricas (RUP) de algunos Estados miembros de la Unión Europea.[8]** Sus poblaciones se enfrentan a una autonomía política y económica limitada y a una pérdida de soberanía efectiva en varios ámbitos. A pesar de mantener un vínculo constitucional con los Estados europeos y de su condición de ciudadanos/as de la Unión, estos territorios siguen estando sometidos al control de los Estados a los que pertenecen en competencias claves como la defensa, asuntos exteriores, justicia o seguridad interior.[9] Esta situación favorece la explotación de los recursos naturales en beneficio de estos Estados, obstaculiza la emancipación económica de los pueblos

5 En este documento, se utiliza la expresión "Estados occidentales" en su acepción geopolítica. En el artículo "Occidente" del glosario Géoconfluences de la Escuela Normal Superior de Lyon se define y explica la evolución de este término. Extractos: "Occidente es un topónimo vinculado a la geopolítica, vago y corriente, que designa, en un principio de forma autocéntrica, a los países de Europa occidental y sus prolongaciones en América del Norte (Estados Unidos y Canadá), e incluso Australia y Nueva Zelanda, según delimitaciones imprecisas y extremadamente variables. [...] Posteriormente, lo que plantea problemas es la idea subyacente de una oposición entre Occidente y el resto del mundo (resumida en inglés por la expresión "the West and the rest"). Esta visión es una prolongación de los marcos de pensamiento que prevalecieron durante toda la colonización hasta el siglo XX, que justificaban la dominación mediante la ideología racial y la misión civilizadora de Europa. Esta visión ha experimentado un cierto resurgimiento en los países del "Sur global", así como también con el desarrollo de los estudios poscoloniales. Leer el artículo completo en el siguiente enlace: https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/occident

6 Estas violaciones graves y sistemáticas del derecho internacional se refieren también a las colonias ilegales en Cisjordania, las restricciones a la libertad de circulación, las detenciones arbitrarias y la discriminación jurídica. Este conflicto, que dura ya más de medio siglo, se caracteriza por la incapacidad de la comunidad internacional para abordar sus causas profundas. Sin embargo, las iniciativas jurídicas como el recurso interpuesto por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, la orden dictada por esta última en enero de 2024 y las órdenes de detención internacionales emitidas por la Corte Penal Internacional demuestran la persistencia y la fuerza del derecho internacional como último baluarte contra estas violaciones.

7 Según la Unión Europea, existen 13 países y territorios de ultramar (PTU) situados en las regiones del Atlántico, la Antártida, el Ártico, el Caribe y el Pacífico. Todos ellos son islas y uno carece de población permanente. No son países soberanos, sino que dependen en diversa medida de los tres Estados miembros con los que mantienen vínculos especiales, a saber, Dinamarca, Francia y los Países Bajos. Para más información: https://www.eeas.europa.eu/eeas/overseas-countries-and-territories_en.

8 Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea (RUP) son territorios que pertenecen a Estados miembros de la Unión Europea, pero que se encuentran en zonas más o menos alejadas de Europa. Son nueve: cinco departamentos franceses de ultramar (Martinica, Mayotte, Guadalupe, Guayana Francesa y Reunión), una colectividad de ultramar francesa (San Martín), dos regiones autónomas portuguesas (Madeira y Azores) y una comunidad autónoma española (Islas Canarias). La Unión Europea reconoce que las RUP "tienen que enfrentarse a una serie de dificultades relacionadas con sus características geográficas, en particular: la lejanía, la insularidad, su reducida superficie y un relieve y un clima adversos. Dependen económicamente de un reducido número de productos (a menudo, productos agrícolas o recursos naturales). Estos factores suponen un obstáculo para su potencial de desarrollo futuro". Más información sobre la situación de las RUP y la estrategia de la UE en la página web del Parlamento Europeo: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/100/las-regiones-ultraperifericas-rup-.

9 Los 13 PTU se consideran jurídicamente externos a la Unión Europea, aunque institucionalmente están vinculados a sus respectivos Estados, que conservan el poder de decisión en los ámbitos que son objeto de soberanía. Esta organización limita el alcance de la soberanía local y perpetúa formas contemporáneas de subordinación política.

indígenas[10] y limita el pleno acceso a los derechos humanos garantizados por los instrumentos europeos e internacionales.[11]

- Además de los casos mencionados, la lista de **territorios no autónomos** reconocidos por las Naciones Unidas[12] demuestra que el proceso de descolonización sigue inconcluso. Varios de estos territorios, que se encuentran en su mayoría bajo el control del Reino Unido o los Estados Unidos, combinan la falta de autodeterminación política con un importante papel en la economía mundial como centros financieros extraterritoriales. Al servir de refugio a la evasión fiscal y el ocultamiento de los recursos generados en los países del Sur global, estos territorios participan en una forma nueva de dominación económica, perpetuando las dinámicas coloniales con formas jurídicas y financieras contemporáneas.

No se trata de situaciones marginales sino que ponen de manifiesto los límites de los mecanismos internacionales de regulación y justicia, para quienes resulta difícil garantizar la plena realización de los derechos humanos ante la persistencia de regímenes de dominación colonial y neocolonial.

2. Capitalismo, explotación y legado colonial

El capitalismo, tanto en su forma histórica como contemporánea, ha sido y sigue siendo un motor central de la colonización y la explotación de los recursos y las personas. La acumulación de capital se ha construido en gran medida por parte de los colonizadores europeos sobre la servidumbre de los pueblos, el expolio de las tierras y los conocimientos, así como la destrucción de sociedades y ecosistemas. Desde el siglo XV, la conquista colonial europea ha ido acompañada de esclavitud, saqueo, mercantilización de los seres vivos y establecimiento de circuitos de intercambio desiguales. Este proceso ha provocado asimismo un epistemicidio, que se define como "la eliminación, la desvalorización o la destrucción sistemática de los sistemas de conocimiento, las lenguas y las visiones del mundo propias de las sociedades colonizadas, en beneficio de un saber eurocéntrico".[13] Incluso hoy en día, la lógica extractivista, la financiarización de la economía y la mercantilización de la vida perpetúan las desigualdades y las injusticias estructurales, alimentando la crisis ecológica mundial. Las grandes multinacionales y los fondos de inversión continúan explotando los recursos naturales y humanos, a menudo en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas, las poblaciones locales, las personas trabajadoras, las mujeres y la juventud, así como de la naturaleza. La precariedad, las migraciones forzadas y la criminalización de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente son consecuencias directas de estas dinámicas. La actual crisis climática ilustra la continuidad de la lógica extractivista capitalista. Los países del Norte global, históricamente responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, han prosperado gracias a un modelo económico basado en el uso masivo de energías fósiles y la explotación del Sur global, que hoy sufre todas las consecuencias de esta injusticia ecológica. Esta situación pone de manifiesto la urgencia de llevar a cabo una transición justa, que se base en el reconocimiento de las responsabilidades históricas y el establecimiento de mecanismos de reparación, redistribución y solidaridad para financiar la adaptación al cambio climático sin crear nuevas formas de deuda. Esto supone, en términos más generales, un cambio de paradigma. Un paradigma que ya no se base en las energías fósiles, que respete los límites del planeta y que, al mismo tiempo, ponga todos los recursos al servicio de la realización de los derechos humanos de forma simultánea.

10 Los recursos naturales (minas, pesca, tierras) de muchos territorios se explotan principalmente en beneficio de las zonas metropolitanas. Esta dinámica impide el desarrollo económico autónomo y contribuye a la marginación de las poblaciones autóctonas en la gobernanza económica local.

11 En las RUP, aunque están integradas en el Consejo de Europa, siguen siendo inaplicables algunos instrumentos de protección de los derechos sociales, como la Carta Social Europea, cuna declaración expresa del Estado. Este mecanismo genera desigualdades jurídicas entre las personas residentes en los territorios de ultramar y las de la Francia metropolitana. En Nueva Caledonia, a pesar de los avances alcanzados en el marco de los acuerdos de Numea, las tensiones en torno a la autodeterminación reflejan la persistencia de cuestiones políticas y de identidad aún no resueltas.

12 Lista oficial de territorios no autónomos según la ONU, actualizada por el Comité Especial de Descolonización (C-24), disponible aquí: https://www.un.org/dppa/decolonization/es/nsgt.

13 Para obtener más información sobre el fenómeno del epistemicidio, consulte los siguientes artículos (en inglés): https://moderndiplomacy.eu/2023/04/13/epistemicide-intellectual-genocide-and-eurocentric-modernity/ y https://nyslibrary.libguides.com/c.php?g=1357224&p=10305425.

3. Los Estados poscoloniales que reproducen la lógica de la dominación

En algunos casos, la colonización reforzó estructuras estatales que ya presentaban una hipercentralización del poder antes de la colonización, lo que exacerbó la invisibilidad de las minorías y el uso de la fuerza como herramienta de gobernanza. En muchos casos, las élites poscoloniales han reutilizado esta lógica en su propio beneficio. En el norte de África, por ejemplo, Estados como Túnez, Argelia, Egipto y Marruecos siguen utilizando la amenaza del "terrorismo" para reprimir la oposición política y la defensa de los derechos humanos: han disuelto la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), hay cientos de personas encarceladas por motivos de conciencia y la libertad de prensa continúa estando muy limitada, al tiempo que en Argelia se ha reprimido violentamente el movimiento popular Hirak, al igual que ha ocurrido con el movimiento del Rif en Marruecos. En Túnez y Egipto, los logros alcanzados por las revoluciones de 2011 se han desmantelado progresivamente y se ha producido un retorno a regímenes autoritarios, tolerados por las potencias occidentales con el pretexto de la cooperación económica o militar, la lucha contra los flujos migratorios o toda una serie de argumentos similares relacionados con la seguridad. Esta represión política y estas violaciones de los derechos humanos con frecuencia se basan en instrumentos legislativos y de seguridad heredados del derecho colonial, que confunden el orden republicano con los reflejos de la dominación colonial. En Turquía, el Gobierno también se ha apropiado de esta lógica para reprimir violentamente los movimientos de protesta y silenciar las voces críticas, con el objetivo de reforzar el poder central en detrimento de las minorías étnicas, religiosas y de género, desmantelando así años de avances democráticos y en materia de derechos humanos, con el acuerdo implícito de Europa, que los utiliza para sus propios intereses de seguridad, económicos y de defensa.

Además, en la actualidad se continúan reproduciendo las estructuras económicas establecidas en la época colonial para controlar la tierra y extraer los recursos naturales. Numerosos Estados poscoloniales, a menudo bajo la presión de la lógica neoliberal mundial, continúan confinados en el papel de exportadores de materias primas sin transformación local ni acceso privilegiado a los productos transformados, lo que los mantiene en el nivel más bajo de la cadena de valor y los priva de toda soberanía sobre sus recursos naturales. La minería ilustra esta persistencia. Por ejemplo, en los territorios del Sáhara Occidental, la explotación de las minas de fosfato beneficia en gran medida a las autoridades marroquíes, sin redundar en beneficio de la población saharaui. En la República Democrática del Congo (RDC), la explotación del cobalto, materia prima fundamental para las tecnologías de transición energética, se lleva a cabo en condiciones que vulneran los derechos humanos. En Chile, la extracción masiva de cobre y litio ha contribuido a exacerbar las desigualdades socioeconómicas y a devastar ecosistemas frágiles, en detrimento de los pueblos indígenas como el mapuche.

Esta lógica neocolonial también resulta evidente en la agricultura. En Sudán, por ejemplo, enormes megagranjas propiedad de inversores emiratíes y saudíes acaparan vastas extensiones de tierras agrícolas, a menudo en un contexto de conflicto armado, para exportar sus cosechas a los países del Golfo, sin que la población sudanesa local se beneficie realmente de ello. Lejos de respetar el derecho de los pueblos a la autodeterminación y de permitir a las poblaciones elegir su propio modelo económico y social, estas prácticas perpetúan una dependencia sistémica y un modelo de acumulación heredado del período colonial, en el que se siguen ignorando los factores sociales y medioambientales.

Por último, en muchos Estados del Norte global las secuelas del imperio continúan alimentando el racismo sistémico. El legado de la jerarquía racial impuesta por los imperios coloniales se deja sentir incluso a día de hoy. El racismo estructural se traduce en un acceso desigual a los derechos, graves disparidades raciales y étnicas en las prácticas policiales brutales y en los sistemas de justicia penal, así como en la marginación persistente de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

La trata transatlántica de personas esclavas, en particular, ha moldeado profundamente las sociedades organizadas en torno al concepto de "raza", cuyos efectos persisten en los Estados Unidos, el Caribe y América Latina. Esta realidad exige un enfoque interseccional de los derechos humanos, que articule las luchas contra el colonialismo, la explotación económica y el racismo. Las políticas migratorias europeas perpetúan el perfilamiento racial, económico y social de las personas procedentes de las antiguas colonias al tiempo que limitan su libertad de circulación mediante la imposición de restricciones discriminatorias. Estas dinámicas también se reflejan en el trato que reciben las personas

migrantes subsaharianas por parte de los Estados poscoloniales del norte de África, a menudo caracterizado por la represión, la discriminación y la exclusión, lo que demuestra la persistencia del racismo poscolonial en esta zona.

4. Instituciones financieras internacionales, sobreendeudamiento y deuda colonial

Son muchos los Estados que fueron colonizados en el pasado y hoy en día continúan sumidos en una dependencia estructural de las instituciones financieras internacionales (IFI), como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, que favorecen los intereses de los acreedores y las potencias económicas dominantes. Desde la década de 1980, los programas de ajuste estructural (PAE) impuestos por el Banco Mundial y el FMI, junto con las reformas económicas que los acompañan, han debilitado considerablemente la capacidad de los Estados para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de su población. En ocasiones, les han obligado a infringir sus obligaciones internacionales y regionales, en particular las del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966. A diferencia de los derechos civiles y políticos, que exigen abstenerse, estos derechos requieren una acción positiva por parte de los Estados. La zona del franco CFA es un ejemplo flagrante de ello. El franco CFA limita la autonomía económica de casi todas las antiguas colonias francesas del África subsahariana al obligarlas a mantener una parte importante de sus reservas financieras en el Banco de Francia, lo que beneficia a las empresas francesas y al Gobierno francés. Este sistema refuerza la dependencia de estos países respecto a Francia y limita considerablemente su independencia financiera.[14] Esto forma parte de la colonialidad.

La deuda de los países del Sur global es en parte una deuda colonial, nacida de estructuras económicas diseñadas para servir a los intereses de la metrópoli. Varios Estados independientes han tenido que asumir las deudas contraídas por sus antiguos regímenes coloniales. El caso de Haití resulta emblemático. En el siglo XIX, Francia impuso una indemnización de 150 millones de francos oro al primer Estado negro independiente como "compensación" por la pérdida de sus plantaciones, lo que comprometió de forma permanente su desarrollo. Este trato desigual continúa hoy en día. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental se benefició de una reducción a la mitad de su deuda y de un límite máximo de su reembolso,[15] mientras que países como Sri Lanka y Ghana dedican entre el 30 % y el 40 % de sus recursos públicos al reembolso de su deuda, sin que puedan contar con los beneficios de un mecanismo de solidaridad comparable. Además, el volumen de riqueza extraída históricamente por los países colonizadores rara vez se documenta o se tiene en cuenta en los debates sobre la deuda. Así, el colonialismo británico en la India extrajo alrededor de 45 billones de dólares entre 1765 y 1938 mediante impuestos forzosos, la manipulación de las exportaciones y el dominio monetario, desviando esos recursos hacia Gran Bretaña en lugar de reinvertirlos en la India.

En América Latina, el legado del colonialismo monetario persiste en forma de dependencia respecto del dólar estadounidense. Países como Argentina y Brasil sufren repetidas crisis económicas relacionadas con la volatilidad de los tipos de cambio, la inflación y el alto coste de los préstamos, agravadas por las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hoy en día, el dominio del dólar refleja la continuidad del colonialismo monetario en un contexto financiero globalizado, lo que da lugar a una dependencia estructural del comercio y la deuda en los países del Sur global. El cuasi monopolio del dólar en las transacciones petroleras, el "petrodólar", obliga a estos países a adquirir dólares de forma permanente para importar productos petrolíferos, por lo que quedan expuestos a choques externos como las crisis monetarias, la inflación y las subidas de los tipos de interés que se decidan en los Estados Unidos, que pueden desencadenar inestabilidad financiera y crisis de deuda. Estas prácticas revelan un claro desequilibrio entre las instituciones dominantes y los países prestatarios, excluidos en gran medida de los procesos de toma de decisiones. Las IFI continúan sirviendo a los intereses de los acreedores, ya que Estados Unidos tiene *de facto* derecho de veto en el FMI.[16] Es fundamental reformar en profundidad estas instituciones, en particular sus procesos de toma de decisiones, con el fin de romper con la lógica de la deuda, la condicionalidad y la

14 Sobre el franco CFA en particular y sobre el papel que desempeña la moneda en las desigualdades mundiales en general, leer *La Monnaie. Du pouvoir de la finance à la souveraineté des peuples* [La moneda. Del poder de las finanzas a la soberanía de los pueblos], ensayo de Rémy Herrera. Extractos disponibles aquí: https://afriquexxi.info/A-qui-profite-le-franc-CFA

15 Gracias al acuerdo de Londres sobre la deuda de 1953, negociado por los antiguos aliados de Alemania durante la guerra, en particular el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos, que formaron la Comisión Tripartita sobre la Deuda Alemana. Para más información, haga clic aquí: https://www.cadtm.org/L-Accord-de-Londres-du-27-fevrier-1953-sur-l-annulation-de-la-dette-allemande

16 Para más información: https://www.imf.org/external/pubs/ft/pam/pam53/pam53.pdf

austeridad, que son contrarias a los derechos humanos. Estas reformas deben garantizar la igualdad de acceso a la toma de decisiones, la cancelación de las deudas ilegítimas, el acceso equitativo a los derechos especiales de giro[17] y la transformación de los flujos financieros en financiación incondicional no generadora de deuda.

A esta deuda financiera se suma una deuda ecológica masiva, que a menudo se ignora. Los países del Norte global, responsables de casi el 92 % de las emisiones excesivas de CO_2, han logrado prosperar gracias a un modelo de desarrollo basado en la explotación de los recursos del Sur global. En la actualidad, los países del Sur global son los que sufren las peores consecuencias del cambio climático, entre otros, la desertificación, la subida del nivel del mar y las catástrofes climáticas. Sin embargo, estos Estados, que con frecuencia son los menos responsables, se ven obligados a financiar por sí solos su adaptación y su transición ecológica, bajo la presión de deudas financieras injustas. Algunas investigaciones han estimado que los países ricos tienen una deuda climática de 192 billones de dólares con los países de bajos ingresos, debido a su responsabilidad en el cambio climático.[18] Esta doble penalización –económica y ecológica– ilustra el modo en que el orden económico internacional sigue reproduciendo relaciones de dominación e injusticia estructural. El reconocimiento de esta deuda ecológica debe ir acompañado de mecanismos de financiación de la transición energética en los países vulnerables, sin generar nuevas formas de dependencia neocolonial.

5. El legado colonial del patriarcado: la invisibilidad de las mujeres y la necesidad de una lectura feminista decolonial

El colonialismo no solo se desarrolló en las esferas económica y política, sino que también reforzó, legitimó y, en ocasiones, reconfiguró las estructuras patriarcales en el seno de las sociedades colonizadas y colonizadoras. La dominación colonial se basó en relaciones jerárquicas entre ambos sexos, imponiendo normas machistas procedentes de la cultura occidental e instrumentalizando a las mujeres en sistemas de control social, moral y cultural. Este proceso contribuyó a descalificar o borrar las formas endógenas de organización social y de conocimiento de las mujeres, al tiempo que les asignaba unos roles de género rígidos. Sin embargo, es fundamental destacar que, en las propias sociedades occidentales, se han producido avances importantes en materia de derechos de las mujeres –como el derecho al voto, el acceso a la educación o la participación en la vida pública–, a menudo tras luchas prolongadas. Sin embargo, estos avances han coexistido con una visión jerárquica de la feminidad, en la que se ha erigido como norma universal la figura de la mujer "moderna", blanca, formada y urbana. Esta construcción no solo ha marginado a las mujeres negras, morenas, pobres o colonizadas, sino que también ha servido de justificación ideológica para la empresa colonial, que se presenta como una misión "civilizadora", incluso en nombre de la liberación de las mujeres. Aun hoy en día, las mujeres en contextos poscoloniales siguen enfrentándose a formas específicas de opresión en la intersección del patriarcado, el racismo estructural, el neoliberalismo y el legado colonial. A menudo se las invisibiliza en el relato dominante, se las excluye de los procesos de toma de decisiones, se ven reducidas a empleos precarios y privadas de su capacidad de actuación política. Esta marginación es especialmente pronunciada en las zonas rurales o los sectores informales, donde el acceso a los servicios públicos esenciales y a condiciones de trabajo dignas continúa siendo insuficiente.

Por lo tanto, es fundamental realizar una lectura feminista decolonial para comprender el modo en que la opresión de género se entrelaza con la lógica racista, económica e imperialista. Nos invita a reconocer las luchas de las mujeres de las colonias actuales y antiguas y las procedentes de ellas –en particular en los movimientos de liberación nacional, la resistencia a la ocupación o las luchas sociales contemporáneas– como centrales y no secundarias. Esto también conlleva la aplicación de políticas de reparación capaces de eliminar las desigualdades y las injusticias estructurales, mediante el acceso a un trabajo digno, seguridad social, justicia, tierra y representación política.

En Túnez, por ejemplo, las mujeres rurales de las regiones marginadas están sometidas a condiciones de trabajo

17 Los derechos especiales de giro (DEG) son una reserva internacional del FMI que complementa las reservas oficiales de sus países miembros. La fórmula actual de distribución de los DEG del FMI otorga más DEG a los países ricos y pocos a los países de bajos y medianos ingresos que más los necesitan en tiempos de crisis. Para más información: https://www.globalcitizen.org/fr/content/special-drawing-rights-sdr-principles-covid-19/h.

18 Para más información sobre estas cuestiones, véase: https://theconversation.com/dette-climatique-des-pays-riches-envers-lafrique-un-devoir-dindemnisation-pour-soutenir-lurbanisation-253301#:~:text=Certains%20chercheurs%20estiment%20que%20la,directement%20li%C3%A9e%20au%20changement%20climatique y https://docs.un.org/es/A/HRC/58/51.

espantosas en actividades agrícolas informales, al tiempo que se ven especialmente afectadas por la precariedad de este sector. Esta situación está agravada por las políticas conservadoras actuales que relegan a las mujeres a la esfera doméstica, limitan el diálogo democrático, encarcelan y obligan al exilio a decenas de mujeres políticas y defensoras de los derechos humanos y limitan el trabajo de las organizaciones feministas, con el consiguiente efecto sobre sus derechos fundamentales y su capacidad de actuar colectivamente.

Reconocer los efectos cruzados del colonialismo y el patriarcado también significa oponerse al uso de la "tradición" para justificar el control del cuerpo y los roles sociales de las mujeres. Por el contrario, un enfoque feminista verdaderamente decolonial exige articular la justicia social, la memoria histórica y la igualdad de género, al tiempo que se cuestiona la universalidad abstracta de un modelo feminista occidental que ignora la diversidad de las trayectorias coloniales, culturales y sociales.

6. Reconocer la homofobia como un legado colonial

La homofobia está profundamente arraigada en la historia colonial. Muchas leyes y normas sociales que criminalizan o estigmatizan a las personas LGBTQI+ se introdujeron bajo el dominio colonial y continúan conformando las actitudes y los sistemas jurídicos actuales. Reconocer la homofobia como un legado del colonialismo es fundamental para combatir la intolerancia y la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género. A menudo se suelen rechazar los esfuerzos por promover los derechos de las personas LGBTQI+ alegando que se trata de una "agenda occidental", aunque en muchos casos son las leyes de la época colonial las que sentaron las bases de la represión, y no la cultura local. Es fundamental cuestionar este legado para lograr una igualdad y una justicia verdaderas.

7. Reconocer y combatir la islamofobia como una manifestación del pensamiento colonial

La visión colonial del islam y de los pueblos musulmanes ha sido una herramienta fundamental para la justificación ideológica, que permite presentar la dominación y la explotación como formas de buena voluntad civilizadora. Difundida por las instituciones educativas, las representaciones académicas, las políticas públicas y algunos movimientos religiosos y cultos de inspiración cristiana, esta visión ha contribuido a configurar de forma duradera el imaginario colectivo.

Aún hoy, estas representaciones influyen en el discurso y las prácticas políticas con respecto a las poblaciones musulmanas, especialmente en los países del Norte global. El islam se percibe a menudo no solo como una religión, sino también como un vector de alteridad cultural y política, que alimenta formas persistentes de desconfianza, estigmatización y discriminación sistémica.

El giro geopolítico del 11 de septiembre de 2001 marcó una importante intensificación de esta dinámica. Bajo el pretexto de la "guerra contra el terrorismo", los Estados occidentales han legitimado una injerencia prolongada en los asuntos internos de varios países de mayoría musulmana, a menudo vulnerando el derecho internacional. Se han justificado estas intervenciones con un discurso de seguridad globalizado, aunque en realidad han servido a intereses económicos, políticos y militares, prolongando así la lógica colonial bajo formas nuevas.

A nivel nacional, este contexto ha facilitado la normalización de los discursos y las políticas islamófobos en las sociedades occidentales. La amalgama entre islam, violencia y amenazas para la seguridad ha justificado la adopción de leyes y medidas que afectan de manera desproporcionada a las comunidades musulmanas. Todo ello se ha traducido en una mayor vigilancia, restricciones a la libertad religiosa, violaciones de la privacidad y estigmatización en los medios de comunicación y las políticas públicas. Estas medidas han creado un régimen de excepción en el que los principios de igualdad y libertad quedan suspendidos o se reconocen, a condición de que se ajusten a las normas culturales occidentales dominantes.

Esta diferencia de trato es especialmente visible en el contexto de las políticas migratorias. Se suele estigmatizar a las poblaciones musulmanas o las que se percibe como tales, originarias de África, Oriente Próximo o Asia meridional, tanto por ser extranjeras como por ser musulmanas. Esta doble etiqueta favorece la exclusión jurídica (restricciones

al derecho de asilo, endurecimiento del derecho de residencia, nacionalidad condicionada a una "prueba de integración") y la exclusión social (discriminación en el empleo, la educación y la vivienda). Contribuye a reforzar la idea de que determinadas categorías de personas, debido a su origen o religión, son intrínsecamente incapaces de integrarse en el mundo occidental "civilizado".

Desde el punto de vista jurídico, la islamofobia, como "forma particular de racismo dirigida contra el islam y las personas musulmanas", es similar a la xenofobia o al antisemitismo. Sin embargo, esta equivalencia no suele reconocerse en la práctica ni en el discurso político. Aunque existen instrumentos jurídicos fundamentales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagran la libertad de religión, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como el respeto de la dignidad humana, los discursos y las prácticas islamófobos a menudo escapan a toda condena jurídica o se justifican en nombre de intereses superiores, como la seguridad nacional, la cohesión social o la laicidad.

Esta diferencia de trato con respecto a otras formas de racismo u odio religioso pone de manifiesto la existencia de un prejuicio sistémico implícito hacia el islam y las personas musulmanas en Europa occidental. Así lo demuestran los discursos estigmatizantes, las restricciones específicas que afectan a las prácticas religiosas musulmanas (en particular, la vestimenta) o las políticas migratorias discriminatorias que afectan indirectamente a las personas que proceden de países musulmanes. Esta asimetría en la aplicación del derecho pone en tela de juicio la universalidad de las protecciones jurídicas, legitima una jerarquía de derechos en función de una afiliación real o supuesta y refleja la persistencia de estructuras neocoloniales de dominación en las relaciones internacionales, así como en los regímenes de ciudadanía nacionales.

8. Repensar la solidaridad internacional

A la luz de estas constataciones, la FIDH considera necesario repensar las prácticas de solidaridad internacional. Con demasiada frecuencia, estas prácticas se caracterizan por una relación Norte-Sur, que se configura en función de la financiación de los Estados occidentales. Estos últimos, cómplices de la dominación actual y desprovistos de comprensión histórica, pueden perpetuar involuntariamente un paradigma paternalista, neocolonial y extractivista. A este respecto, conviene asimismo cuestionar el propio concepto de "desarrollo", cuyo alcance es tanto más insidioso cuanto que a menudo se impone como una verdad universal evidente, al tiempo que sigue estando configurado principalmente por las normas occidentales. Se ha utilizado este concepto, de forma sutil pero persistente, para legitimar políticas de injerencia, extracción y dominación, en detrimento de la autonomía y las prioridades de las comunidades afectadas.

Aunque los marcos normativos internacionales han evolucionado desde la Segunda Guerra Mundial, en particular en el contexto de la descolonización, su desarrollo sigue reflejando principalmente las perspectivas occidentales. Diferentes partes del Sur global señalan a menudo esta realidad, a la vez que reclaman un mayor reconocimiento de sus experiencias, necesidades y visiones en la construcción de un orden internacional más inclusivo y equitativo. Tener en cuenta estas reivindicaciones en el marco de la reflexión sobre la solidaridad internacional es una etapa fundamental para garantizar su legitimidad y eficacia.

Por lo tanto, resulta esencial construir una solidaridad basada en la escucha, la reciprocidad, la cocreación y el reconocimiento de los conocimientos militantes y populares, en particular en las luchas feministas, ecológicas, sociales y decoloniales. Esta solidaridad debe promover modelos económicos alternativos basados en la justicia social y medioambiental, la participación de las comunidades locales, el reconocimiento y la valorización de los conocimientos tradicionales e indígenas, así como una solidaridad internacional horizontal, adoptando al mismo tiempo la perspectiva de una transición justa y evitando el extractivismo epistemológico.

Conclusión: la universalidad de los derechos humanos y la necesidad de inclusividad

La cuestión de la universalidad de los derechos humanos es especialmente importante, dada su compleja historia y el contexto en el que se ha desarrollado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), adoptada en

1948, se redactó en una época en la que muchos pueblos se encontraban aún bajo dominio colonial y durante mucho tiempo se consideró una expresión de valores esencialmente occidentales, derivados de las tradiciones liberales europeas. Esta realidad histórica ha suscitado constantes críticas. En ocasiones, se ha percibido la universalidad de los derechos humanos como un instrumento para imponer normas externas, o incluso para legitimar relaciones de poder desiguales, en detrimento de las realidades, los sistemas de conocimiento y las aspiraciones de los pueblos colonizados.

Sin embargo, desde su elaboración, la DUDH también recibió la influencia de corrientes de pensamiento procedentes de Asia, África y América. La importancia de la interdependencia social, la solidaridad, el bienestar colectivo y el reconocimiento de los derechos colectivos y del derecho a la libre determinación contribuyeron a ampliar y enriquecer el ámbito de aplicación de los derechos humanos. En las décadas siguientes, la participación activa de los Estados poscoloniales en la elaboración de nuevos instrumentos internacionales –como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Declaración sobre el Derecho a la Libre Determinación– confirmó que la universalidad de los derechos humanos se basa en el reconocimiento de valores comunes, respetando la diversidad de culturas y experiencias.

Sin embargo, la visión de una universalidad inclusiva continúa obstaculizada por la colonialidad, la persistencia de paradigmas y prácticas de dominación, así como la aplicación a veces selectiva o instrumentalizada de los derechos humanos, lo que sigue alimentando los debates sobre el alcance real y la capacidad de estos derechos para servir de resorte para la emancipación de todos los pueblos.

Por ello, es necesario enriquecer la universalidad de los derechos humanos con la aportación de una pluralidad de voces, experiencias y luchas. La universalidad exige, por tanto, que los derechos humanos se apliquen sin discriminación.
La universalidad puede servir como instrumento de emancipación y justicia mundial si logra integrar plenamente las contribuciones de los pueblos antiguamente colonizados, reconoce y valora la diversidad de contextos y se libera de la colonialidad heredada del pasado.

Próximos pasos

Por todo ello, la FIDH se compromete a desarrollar un enfoque decolonial y eficaz de los derechos humanos, a la altura de los retos históricos y contemporáneos. Al asumir este compromiso de adoptar un enfoque decolonial en la puesta en práctica de nuestra visión, nuestra misión y nuestro mandato, imaginamos una situación en la que las acciones de la Federación contribuyan de manera significativa a un orden social mundial más justo, más inclusivo y más equitativo.

La FIDH se compromete a actuar en tres niveles complementarios:

- proseguir nuestra reflexión institucional, así como el desarrollo de nuestro pensamiento y enfoque decoloniales en materia de prácticas institucionales y medidas;
- elaborar recomendaciones externas y acciones concretas dirigidas a las autoridades políticas, los Estados y las instituciones internacionales, con el fin de promover marcos normativos internacionales y regionales más inclusivos y garantizar el respeto de los derechos de todas las personas, tanto a título individual como colectivo;
- consolidar los pasos 1 y 2 anteriores en una estrategia y un plan de acción que proporcionen orientaciones prácticas a la FIDH, a las organizaciones miembros, a los socios y a otras instituciones sobre el enfoque decolonial de la Federación.

El nuevo Buró Internacional que se elija durante el 42.º Congreso y la Secretaría Internacional, continuarán con este trabajo, que contará con la consulta y la participación efectiva de las organizaciones miembros de la Federación.